

RESOLUCION Nº 6/91

Buenos Aires, 18 de abril de 1991.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en la Resolución Nº 18/90, de fecha 6 de diciembre de 1990, de esta Procuración General de la Nación, existe una firme y decidida posición asumida por parte del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a eliminar los obstáculos que pudieran impedir un pronto esclarecimiento de aquellos hechos delictivos que se han dado en denominar "de corrupción económica o administrativa", y por consiguiente, la oportuna sanción de quienes resultaren sus autores, cómplices o encubridores.

Que hasta tanto se estructuren los distintos proyectos con los que el Poder Ejecutivo Nacional, primordialmente en base a la propuesta de la Sub-Secretaría de Justicia de la Nación ("Estrategia Política contra la Corrupción"), busca lograr esa efectiva agilización de dichos procesos, implementando medidas tales como: un moderno régimen de juicio penal, incorporación de un cuerpo de peritos auxiliares de la magistratura, creación de nuevos juzgados y fiscalías federales, nuevas leyes de Organización del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, etc., resulta oportuno arbitrar todas las medidas que ten-

dientes a tal objetivo, y conforme a los lineamientos ya esbozados, estén hoy dentro de los medios disponibles..

Por ello, en ejercicio de las facultades que me asigna el art. 116 del C. de P. en M.P.,

RESUELVO:

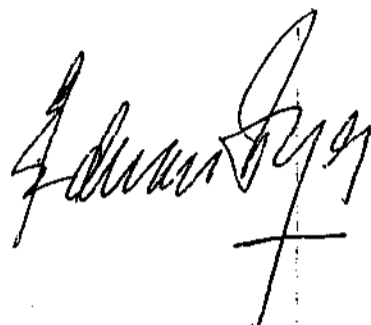
Impartir instrucciones generales a los señores Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones y por su intermedio a los señores Fiscales de Primera Instancia, en los siguientes términos:

1º) En toda causa en donde se investiguen los delitos contra la administración pública que hoy han adquirido la denominación de hechos de "corrupción administrativa o económica", al tomar intervención el Ministerio Público, el funcionario que lo represente deberá comunicarse de inmediato con esta Procuración General, a fin de que por medio de esta Institución, cabeza del Ministerio Público, actuando en conjunción con la Sub-Secretaría de Justicia de la Nación, se atiendan, dentro de las posibilidades actuales, las necesidades o refuerzos de todo tipo que las circunstancias demanden, a fin de facilitar una exitosa investigación y un rápido trámite del proceso.

Se tendrá en consideración en cada caso, la gravedad de los hechos investigados, la jerarquía funcional de los imputados, el perjuicio concreto o eventual inferido a los intereses de la Nación, el beneficio

indebido que se hubiere obtenido con la conducta reprochable  
y la conmoción pública que su difusión provocare.

2º) Regístrese y hágase saber.



OSCAR EDUARDO ROGER  
PROCURADOR GRAL. DE LA NACION